

Cumplimiento del deber de información. Informe 20/2007

La consulta plantea si, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Corporación consultante puede remitir a sus colegiados un aviso legal sobre protección de datos, en cumplimiento del derecho de información, por medio de correo ordinario, dando fe el Secretario General del Colegio de dicho envío y de las posibles devoluciones.

Como cuestión previa, es preciso señalar que dado que del contenido de la consulta no se desprende otra cosa, entendemos que “por aviso legal de protección de datos”, se está refiriendo al cumplimiento del deber de informar previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El artículo 5.1 de la citada Ley Orgánica establece que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Dicho lo anterior, la conservación de este consentimiento será imprescindible para asegurar que el tratamiento de los datos se ha adecuado a las exigencias contenidas en la Ley. En consecuencia será necesario que se haya constar de alguna forma en el fichero la existencia de esta autorización, conservando, en un soporte que permita asegurar su autenticidad, la conformidad del afectado con el tratamiento de sus datos, asegurando asimismo que el afectado tiene pleno conocimiento de los extremos requeridos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, si la consultante intenta, a través de la información a la que se refiere la consulta, subsanar la omisión del deber de información que debió cumplir en el momento de la recogida de los datos mediante el envío de una comunicación informativa a los afectados, dado que parece que, al

proceder los datos de los mismos pudiera considerarse que se consintió por aquellos en su recogida y tratamiento, debe señalarse que la Audiencia Nacional ha analizado el efecto probatorio de la notificación a los interesados del tratamiento de sus datos personales en su Sentencia de 24 de enero de 2003, de la que se desprenden las siguientes consecuencias:

- La mera contratación de un medio independiente para la notificación no acredita más que la existencia del contrato, pero no que se ha hecho el envío.
- La prueba del envío de una notificación no acredita por sí misma su recepción por el afectado.
- Si el destinatario niega la recepción, la carga de la prueba del envío recae sobre el responsable del tratamiento.
- El que se hayan efectuado otras notificaciones al afectado no es suficiente para probar la notificación del “documento” respecto del cual se niega la recepción.

En consecuencia, la Audiencia Nacional viene a reconocer que sin perjuicio de que la carga de la prueba de la notificación corresponde al responsable del fichero, será suficiente para lograr esa acreditación la aportación de indicios suficientes que coadyuven a entender cumplido el requisito.

Ciertamente, los posibles indicios a aportar podrán diferir en cada caso. En el supuesto analizado por la Sentencia de 31 de mayo de 2006, se aceptaron como indicios “la inclusión en el fichero auxiliar de notificaciones de esta comunicación como realizada” y el hecho de que “(el afectado) se dirige a (la recurrente) sabiendo que sus datos están incluidos en el fichero y quien había sido la entidad informante de los mismos sin que se haya acreditado mínimamente que dicho conocimiento lo obtuvo de forma distinta de la comunicación que dice haber realizado (la recurrente), y, finalmente, “el hecho de que al domicilio al que aparece dirigida la comunicación que se niega haber recibido, se han remitido otras comunicaciones de las que el denunciante ha tenido perfecto conocimiento”.

No obstante, podría resultar conveniente la utilización de medios fiables, independientes y auditables para la realización de las notificaciones o la obligación de comprobación de que los envíos no han sido devueltos por su destinatario. Al tratarse de medios independientes, en el caso planteado, resultaría aconsejable que la acreditación de dichos envíos y las posibles

devoluciones las efectuará una persona distinta al Secretario General del Colegio.